

OTRA VISION DE LA CRISIS

La Conferencia Sindical Internacional acaba de celebrar una Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Digno para una Vida Digna *“para denunciar el actual modelo de globalización basado en el capitalismo especulativo con consecuencias en el incremento de la pobreza, quebranto de los derechos laborales, deterioro de los sistemas de redistribución de la riqueza y reivindicar otro orden económico internacional fundado en la justicia social y la economía social de mercado, imprescindibles para afrontar con éxito los grandes retos de la humanidad, desde el cambio climático a la satisfacción de las necesidades más básicas”*.

Se trata de una cita totalmente oportuna dadas las circunstancias de crisis de la economía mundial y la situación de incertidumbre, con recomendaciones y planes de rescate que en absoluto ponen en cuestión el orden imperante, causante principal de la crisis. Como dice Stiglitz (Nobel de Economía 2001), esta crisis es fruto de la falta de honestidad de las instituciones financieras y de la incompetencia de los gobiernos por no intervenir en el mercado, porque si bien la situación se ha agravado con la crisis de los créditos *subprime* de Estados Unidos, situaciones de quiebras de grandes bancos ya las veníamos sufriendo antes, aunque ya nadie se acuerde y hayamos perdido la cuenta de los grandes bancos, fondos de inversión o aseguradoras que han quebrado y de la cifra de los rescates que están pagando los bancos centrales y los gobiernos para salvarlos. Todo ello evidencia que el modelo de globalización ya ha caducado, tal y como veníamos denunciando quienes reivindicamos que otro mundo es posible aunque nos llamen utópicos.

Estamos ante una crisis con consecuencias en la economía real, que afecta al sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, que sufren el incremento de sus deudas y la pérdida de poder adquisitivo, con lo cual cada vez son más las familias con dificultades para llegar a fin de mes. Y la recomendación general es la de apretarse el cinturón, que se traduce en la contención del gasto público y la moderación salarial, directrices que está siguiendo estrictamente el Gobierno de Zapatero.

El presidente español se limita a anunciar alternativas económicas puntuales basadas fundamentalmente en ayudas para los promotores de viviendas y las PYMES y en la contención del gasto público. Nada de invertir en infraestructuras, nada de potenciar otros sectores que no sean la construcción. Sin embargo, en una economía basada sobre todo en la construcción y el sector servicios, los sectores más vulnerables ante la crisis, en esta coyuntura cabría esperar otras iniciativas que reforzaran otros sectores económicos que aporten mayor valor añadido y desde la izquierda cabría esperar una política presupuestaria anticíclica.

En relación con la política de empleo Zapatero se acoge a la nueva teoría de la flexiseguridad, es decir, flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador, lo que se concreta en una menor regulación del mercado laboral, flexibilidad y pérdida de los derechos laborales. Y se traduce en medidas tales

como la jornada laboral de 60 horas semanales, aprobada por los ministros de trabajo de la Unión Europea. Esta directriz no reconoce que las horas de la jornada es uno de los factores fundamentales que establecen las condiciones laborales y, por tanto, está sujeto a la negociación entre los agentes sociales, y no a la negociación individual de cada trabajador con su empleador; va en contra del derecho laboral ya consolidado, como es la jornada de 40 horas semanales, fijada como tope máximo por la OIT en 1917.

En este contexto los agentes sociales, la patronal y el Gobierno español firmaron en julio la declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso que incluye la hoja de ruta del diálogo social. Pasada la euforia de la firma del documento, Solbes ya ha advertido de que en esta legislatura no se cumplirá el compromiso de subir el SMI a 800 euros mensuales (de todas formas seguiría siendo el más bajo de nuestro entorno europeo), lo que supondría un incremento medio anual del 8,25%. Para el año 2009 sólo está previsto un aumento de entre el 2% y el 3%, es decir, menos que el IPC, con la correspondiente pérdida en poder adquisitivo. Mientras, la subida de los precios afecta en mayor medida a las familias con menos recursos, pero ya sabemos que la disminución de la demanda y la pérdida del peso específico de los salarios en la economía están fuera del análisis de Solbes.

Para el caso concreto de la disminución de la demanda no sirve que nos recuerde la deducción de los 400 euros, porque ya se sabía que esta medida no iba a incentivar el consumo de las familias, y en absoluto es una medida progresiva puesto que los que más necesitarían ese ingreso adicional no tienen acceso al mismo. Cabe recordarle a Solbes que incluso la OCDE ha advertido ya de la bajada del sueldo medio. La participación de los salarios en la renta estatal ha descendido del 49% de 1995 al 46,4% actual, y ello es debido a que se crean nuevos puestos de trabajo a costa de rebajar los salarios, lo que ha dado origen a una nueva clase social, los mileuristas, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. Y más grave todavía es que este proceso se haya dado durante los años en los que las empresas del IBEX35, las principales compañías del Estado, han obtenido pingües beneficios. Este mismo año, en el primer semestre, sus beneficios han crecido un 17% sin que esto haya tenido ninguna repercusión en el reparto de la riqueza.

El Gabinete Zapatero también ha anunciado el incremento de las pensiones en un 6%, pero es que son más de 4 millones los pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes, lo que en absoluto garantiza una vida digna. Y si bien sus pensiones subirán más que el IPC, no debemos olvidar que el IPC es la media de la subida de los precios de una serie de productos. En este sentido cabe destacar que el aumento interanual en el transporte está en un 8,6%; en la vivienda, en un 7,9%, y en los alimentos y bebidas no alcohólicas, en un 6,8%. Es decir, precisamente los productos que más se han encarecido son los que más consumen los pensionistas, de manera que subir las pensiones en un 6% no va a compensar estas subidas de precios y, en consecuencia, su poder adquisitivo se verá reducido.

Y es que, en definitiva, la crisis es más compleja que el encarecimiento del petróleo y la inestabilidad de las bolsas y de la banca internacional.

Nekane Altzelai

Parlamentaria y responsable de Asuntos Sociales de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna

2008-10-13